

# SIN PODER

Construyendo colectivamente  
la autogestión de la vida cotidiana

SIN PODER  
Construyendo colectivamente  
la autogestión de la vida cotidiana

Coordinan la edición: Javier Encina y Ainhoa Ezeiza

Editan:

Volapük Ediciones. A.C. Libros Volapük  
*www.volapukediciones.blogspot.com.es*

Seminario de Ilusionistas Sociales  
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)  
*www.ehu.es/ism*

UNILCO-espacio nómada  
Universidad Libre para la Construcción Colectiva  
*www.ilusionismosocial.org*

Colectivo de Ilusionistas Sociales  
*autogestion.ilusionismosocial.org*

Diseño y maquetación: J. Corrales [kreiva.es]  
Correcciones: Ainhoa Ezeiza y Sergio Higuera  
Ilustraciones *Preámbulo, Ambulando y Epiámbulo*:  
Erika Garrido Bazán. *erigabe@gmail.com* | *lapeztevisual.tumblr.com*  
Fotografía de solapa: Raffran

Primera edición: marzo 2017, Guadalajara.  
Impresión: Ulzama Digital (Huarte, Navarra)

Depósito Legal: GU-25-2017  
ISBN: 978-84-940852-7-7



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

## Burocracia y mercado o ciudadanía: la política de los paños calientes y algunas alternativas desde el bien común.

Felipe GARCÍA LEIVA<sup>1</sup>

El debate y las prácticas de la administración de los servicios y los asuntos públicos parecen anclada en dos únicas posibilidades: realizarlas directamente desde los aparatos públicos estatales o dejarlas en manos del sector privado. Aunque es cierto que se ha producido toda una serie de variantes mediante la hibridación de estos polos; quizás la más conocida es la que se podría denominar fórmula socialdemócrata, que reserva una parte de la titularidad, la gestión y la financiación de los servicios al sector público, pero que encarga otra sustancial a la iniciativa privada. A su vez, las corrientes de corte más liberal entienden que el papel del Estado debería reducirse a su mínima expresión y que sean las iniciativas privadas y el mercado quienes se encarguen no solo de gestionar dichos servicios, sino hasta de regularlos. Las diferencias de grado que se dan entre estas cuatro opciones (estatalistas, mercantilistas, socialdemócratas y liberales) han ido generando un gran número de prácticas mixtas y han seleccionado qué estructuras sociales deben ser las operadoras, lo que ha venido a denominarse los agentes sociales encargados de dicha labor.

Más que el análisis o la valoración del papel que han venido desempeñando cada una de estas perspectivas

y agentes sociales, aquí nos interesa señalar cómo se han sacado de la ecuación otras posibilidades que no encajan dentro de este esquema dual. Sobre todo las que tienen que ver con la participación efectiva y directa de la ciudadanía; las alternativas que se han ido proponiendo y desarrollando mediante los tejidos de solidaridad y convivencia más o menos informales: lo que se viene conociendo como prácticas del «bien y los cuidados comunes», el «mutualismo», la «cooperación», la «economía social» o la «ayuda mutua». Como veremos, estas otras maneras de hacer juntos<sup>2</sup>, no solo se han obviado, obstaculizado o marginado, sino que, pese a ello, en gran medida el estatalismo y el mercantilismo son posibles porque sus déficits, vacíos y excesos se han corregidos por estas solidaridades informales, por ese olvidado pilar fundamental del Estado del bienestar. Pero cometeríamos un error si tan solo consideráramos estas prácticas de convivencia y solidaridad como una mera reacción a los sistemas burocráticos y privados o la fuga a sus arcadias escondidas de unos cuantos *outsiders*. Como cuentan y demuestran historiadores como Edward Palmer THOMPSON<sup>3</sup>, los mecanismos de ayuda mutua y de bienes comunes tienen un componente de contestación y resistencia ante los desmanes de los aparatos y las dinámicas burocráticas y privatizadoras, que se irán estableciendo cada vez con mayor preponderancia con la revolución industrial, llegando en nuestros días a sus cotas más altas de penetración e implantación sociocultural. Pero el autor inglés también señala que se trataba de unas maneras de hacer juntos que ya existían desde antes y no dependían o no eran simplemente una oposición a aquellos procesos privatizadores y de burocratización de la vida. De hecho, uno de los empeños

más acérrimos de aquella clase social de ricos y burgueses industriales y actualmente de las élites ultraliberales y del socialismo neoliberal no ha sido otro que oponerse e intentar destruir cualquier vestigio, institución sociocultural o práctica basada en la ayuda mutua y en los bienes comunes, aquellas que se pudieran convertir en una referencia para la ciudadanía o una alternativa a unos modelos hegemónicos que se proponen a sí mismos como los más perfectos, cuando no como los únicos posibles. Muchas de las experiencias que he podido conocer de estas otras formas de preocupación y ocupación por el prójimo, no solo son prácticas anticapitalistas y antiburocráticas, sino que albergan en su concepción y desarrollo aspectos originales y hasta independientes a los patrones de pensamiento y actuación dominantes. Son propuestas en positivo, no solo negaciones o resistencias a algo.

A continuación, vamos a presentar dos casos concretos que muestran cómo las prácticas cotidianas solidarias y basadas en el bien común corrigen los agujeros de los sistemas estatalistas y privados, además de cómo son capaces de crear alternativas diferentes y que se salen de las lógicas chatas de aquellos. El primero tiene que ver con la inmigración, el cuidado de los más jóvenes y las personas de la tercera edad. Con el siguiente mostraremos cómo las formulas estandarizadas se han mostrado incapaces de dar una respuesta mínimamente decente a una de las situaciones más graves de abandono e insolidaridad social: el de la gente que se ve abocada a vivir y dormir en la calle. Esbozaremos algunos aspectos que muestran cómo se ha desarrollado todo un negocio de intereses corporativos en torno a la explotación de la pobreza, pero también cuáles podrían ser algunas de las alternativas a este estado de cosas

en base al reconocimiento de los derechos de las personas más desfavorecidas y de sus propias capacidades.

¿Es necesario para la mejora de la gestión de lo público y el bien común implementar más mecanismos y aparatos de intervención o replantearse más bien qué intervención es la más adecuada? ¿Es intervención lo que la gente necesita y demanda, o más bien sería una suerte de des-intervención? ¿Se trataría del empoderamiento o, por el contrario, el que se generen mecanismos de desempoderamiento de aquellas dinámicas, intereses y aparatos que condicionan la vida de las personas? ¿Es tan obtusa la ciudadanía que debe existir todo un aparato de mediaciones de supuestos especialistas para gestionar sus propios asuntos y aquellos que podrían ser considerados como comunes?

## Caso 1

Sevilla. Zona norte de la ciudad. Barrio popular y de clase trabajadora. Mitad de la primera mitad de la década del año 2000. Pleno *boom* de la inmigración en España. Saltan todas las alarmas en la ciudad: los hijos de los inmigrantes subsaharianos parece que no acuden a las guarderías públicas. En una ciudad empapada de un gusto exacerbado por el retruécano y la tragedia barroca, cunden las más perversas hipótesis sobre los hechos: que si los inmigrantes subsaharianos utilizan a los niños para la venta ambulante, que si sus padres no los cuidaban adecuadamente, que no muestran el suficiente interés por su escolarización y hasta que el hecho está relacionado con la prostitución, la venta de menores o las ablaciones de órganos genitales. Pocos de los más encendidos voceros

conocen el lugar y menos aún la realidad de la inmigración negroafricana de Sevilla. ¿Será que por esos barrios no pasa ninguna procesión de Semana Santa, ni allí vive ninguno de los próceres «miarmas»?

Sevilla. Una plaza, un parque o una calle cualquiera de las populares y modestas barriadas del norte de la ciudad. Un anciano «blanco» —de esa manera oscura en la que son blancos gran parte de los andaluces— pasea llevando de la mano a un niño «negro» de unos tres años de edad. Nos acercamos a ellos. Les preguntamos por una dirección y entablamos una pequeña conversación:

— ¿Su nieto? —le digo.

— No, no —se ríe—, es el hijo de mis vecinos... pero como si lo fuera. Cuando sus padres no pueden porque están trabajando o tienen que salir por cualquier cosa, me quedo yo con él.

Al poco tiempo conocimos a una señora blancamorenandaluza que llevaba dos tardes a la semana a la piscina Virgen de los Reyes a un niño y una niña negrosdepadresinmigrantesdeorigenafricano. Nos cuenta que ella no es la única. Que es verdad que hay algunos problemas en el barrio entre inmigrantes y españoles, pero también entre españoles y españoles, que siempre los había habido, pero que como en cualquier sitio. Que al principio, cuando empezaron a llegar tantos, la cosa chocaba un poco, pero que después, con el trato diario, la gente se va conociendo e incluso traba amistad:

—Yo llegue aquí al final de los 60, cuando se estaba construyendo todo esto. Aquí lo que había eran huertas

y descampados. Yo era de Constantina. Ahora es como si estuviera ahí al lado, pero entonces parecía otro mundo. De alguna forma también fui inmigrante. Incluso la gente de la ciudad nos miraba mal y nos decían muchas cosas: que si catetos, que si éramos unos guarros, que si éramos unos muertos de hambre, siempre los peores trabajos, que mira cómo íbamos vestidos, que no sabíamos hablar, que éramos unos analfabetos... ¿qué te voy a contar? Si empiezo no pararía en todo el día. No te creas que fue muy diferente. Se dice que en esta ciudad somos muy abiertos, pero aquí también hay mucho clasismo y poca memoria... mira, no solo los ayudo yo, sino que sus padres también me ayudan a mí muchas veces. Cuando una llega a esta edad hay muchas cosas que ya no se pueden hacer por una misma—.

Fuimos indagando e iban apareciendo cada vez más casos similares. No solo sucedía con los hijos de los inmigrantes, sino también con los de los españoles. Gente mayor que hacían las veces de abuelos de niños sin ninguna relación de consanguinidad. Comprobamos, igualmente, que la oferta de plazas en las guarderías públicas era a todas luces insuficiente, pese a la negación contumaz para reconocerlo por parte de los responsables políticos. Comprobamos que había muchos niños que no iban a las guarderías, no porque sus padres no quisieran o se despreocuparan, sino porque pese a inscribirlos, no les asignaban plazas. Comprobamos que el quedarse sin plazas era especialmente habitual para los hijos de las familias de inmigrantes extranjeros, sobre todo para aquellos que no conocían correctamente el castellano, no estaban familiarizados con la infinidad de trámites burocráticos que la administración suele solicitar para cualquier gestión,



cuando no sabían o no podían cumplir con todos los mil requisitos exigidos, cuando los padres se encontraban de una manera irregular en España y esto les provocaba miedo, cuando se tenían que mover de un lugar a otro cada dos por tres en busca de mejores oportunidades... Comprobamos que para muchas familias españolas e inmigrantes pagar una guardería privada ponía en jaque sus modestas economías domésticas. Comprobamos que realmente había niños mal atendidos como en otros lugares de la ciudad, incluso en los más pijos. Comprobamos que al igual que entre los españoles, hay costumbres discriminatorias contra los niños y desigualdad de género, como en otros lugares de la ciudad, incluso en los más pijos. Pero también comprobamos que la gran mayoría —como dicen los políticos— de las familias se desvivían por sus hijos, tanto las españolas como las inmigrantes extranjeras, como en otros lugares de la ciudad, incluso en los más pijos, aunque con menos medios.

Y sobre todo pudimos constatar que en estas barriadas se estaban tejiendo solidaridades informales y no institucionalizadas, basadas en los vínculos de proximidad, en los cuidados y el reconocimiento mutuos, en la revalorización de lo común y el respeto a la diversidad, en la conjunción inesperada y dinámica de lo nuevo y lo tradicional, no como en otros lugares de la ciudad que se habían producido proceso de gentrificación, sobre todo en los más pijos. Formas de hacer juntos modestas, con pocos recursos pecuniarios, de esas que hacen mucho con poco —puestas a esas otras que hacen poco con mucho—, pero con una gran fortaleza de eso que los sociólogos pedantes llaman capital humano. Capaces de optimizar de manera creativa y hasta límites insospechados lo mínimo

o lo suficiente, verdaderos ejemplos no ya de «decrecimiento», sino de aquel *usus facti* franciscano, del que ni siquiera ha «crecido». Fórmulas alternativas y superadoras del anquilosado y demagógico debate de que las dos únicas posibilidades están entre lo públicoburocráticoestatalista y lo privadoindividualistacapitalista o en la síntesis socialdemócrata de ambos polos. Maneras de hacer, tácticas cotidianas y prácticas, ardidés no ya de empoderamiento, sino de desempoderamiento, más que de intervención, de des-intervención, de desinstitucionalización.

De manera informal, desde la cercanía, desde los afectos, desde las inteligencias colectivas, sin planificadores institucionalizados, ni expertos, ni cráneos privilegiados, ni ejércitos de técnicos, sin burocracias, sin entidades mediadoras que dedican más del 80% del dinero público en pagar sus propios sueldos, sin impresos, sin subvenciones, no como proyecto lineal, sino como proceso comunitario abierto y multiforme, flexible pero sólido, había surgido algo que si se pretendiera hacer desde las geometrías institucionales o de las organizaciones dependientes y pelotas de estas, jamás se lograría hilvanar: diálogo y solidaridad intercultural e intergeneracional, conocimiento y reconocimiento mutuo, activación de personas mayores frecuentemente tenidas como pasivas o superfluas, conciliación de vida familiar y laboral, revalorización del espacio público, optimización de recursos escasos, resolución de conflictos y potenciación de la convivencia, rescate de la memoria migratoria de los años 60 y 70, desinstitucionalización de los niños... ¿Alguien puede dar más por menos? ¿Por qué no explorar y apoyar estas alternativas con el dinero que pagamos todos y que solo se suelen gastar unos cuantos? Cuando lo hemos propuesto:

silencio administrativo y político; «eso es una locura», «hay que seguir los protocolos», «no hay presupuesto para eso», «cómo se van a dejar estas cosas para que las haga la gente», «la Ley no lo permite», «el interventor municipal lo echaría para atrás», «cuando podamos, crearemos más plazas de guardería», bla, bla, bla.

## Caso 2

España se encuentra a la cola de los países europeos con menor inversión en políticas sociales de la Comunidad Económica Europea. Las inversiones públicas en materia de atención y superación del sinhogarismo se encuentran también a la cola de las inversiones en políticas de atención a los más desfavorecidos en nuestro país. Es decir, no es que en la materia seamos cola de león, ni tan siquiera la cabeza del ratón, sino el extremo de la cola del roedor. No es de extrañar que el denominado Tercer Sector no ceje en reivindicar más fondos. Cualquier persona con un mínimo de eso que se llama conciencia social firmaría esta petición y consideraría justa esta lucha, ¿no? Pero, ¿para qué y para quiénes se solicita ese dinero? ¿Para las personas que se ven abocadas a vivir en la calle? Eso es lo que yo no tengo tan claro después de más de diez años dedicado a la investigación y la atención a las personas sin hogar, tras haber conocido a muchas de ellas y a buena parte de los servicios. He encontrado organizaciones y gente que se dedican al prójimo de manera sincera y poniendo todo lo que tienen en el empeño, pero también otras que se guardan mucho, quizás demasiado. Detengámonos aunque sea tan solo por un momento, para intentar ver qué hay tras la obviedad del «necesitamos más

dinero», pues puede que tras estas soflamas aparentemente bienintencionadas, a la gente de la calle tan solo le lleguen las migajas del festín de las empresas privadas y las burocracias asistencialistas.

Como primera piedra de toque sírvanos de entrada para ilustrar el tema una extraña coincidencia, que quizás algún cabalista supiera interpretar. Va en torno al número 2. Del presupuesto general de la Iglesia Católica española, aquella que se considera heredera del Nazareno y del Poverello, tan solo un 2% se dedica a su obra social, es decir, a los más pobres. Ello pese a los alarmantes informes que la propia FOESSA —dependiente de Cáritas— viene publicando periódicamente sobre las condiciones de vida de los ciudadanos y el aumento crítico de la pobreza y la exclusión social en nuestro país. Por su parte, una de las entidades más conocida de nuestro país y que se presenta como una organización sin ánimo de lucro, aconfesional y a la vanguardia de la intervención social con personas sin hogar en nuestro país, dedica en ayudas directas a estas personas la escalofriante cifra aproximada de un 2-3% de su presupuesto total, que superará los 4 millones de euros al año, según su propia memoria del año 2013 —información que en años sucesivos sorprendentemente ha desaparecido de la misma—.

Pero entremos aún más de lleno. Más del 90% de la financiación de la atención a las personas sin hogar proviene de fondos públicos (municipales, provinciales, autonómicos, nacionales y europeos). Lo que significa que sale del dinero que los anegados y ya incrédulos ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Una buena tajada del restante menos del 10% lo aportan entidades privadas o particulares que reciben deducciones fiscales u otra clase

de privilegios por estas «donaciones». No obstante y aunque la titularidad de buena parte de los servicios sea pública —y aquí es donde empieza a chirriar la cuestión—, en su inmensa mayoría están gestionados por entidades privadas. Lo que convierte a este en uno de los sectores de la intervención social con un grado más alto de privatización. Esto es, tras inyectarse dinero público, se deja la atención de los casos más graves de pobreza y exclusión en manos del sector privado, que en España es conocido por su proverbial altruismo, ¿no? Además, debemos estar doblemente tranquilos, pues en este país la administración pública se caracteriza por su rigor y contumaz seguimiento y fiscalización de las cuentas y las actuaciones de quienes hacen uso de los fondos públicos, ¿no?

En Sevilla, concretamente, tan solo existe un servicio de coordinación y orientación que sea público en su gestión, el COIS<sup>4</sup>. Ni siquiera el 10% de los profesionales que trabajan en la atención a las personas sin hogar son empleados públicos. Lo que quiere decir que la mayoría trabaja en las condiciones que impone el sector privado (llevando a cabo un servicio público financiado con fondos públicos). Si exceptuamos lo que perciben los cuadros directivos de estas entidades privadas, que se mantienen en la más absoluta opacidad, el sueldo medio de los profesionales implicados en la atención directa a las personas está en una media de unos 16.000 € brutos anuales —cuando el contrato es a jornada completa—. Lo que se traduce en un salario neto mensual que escasamente supera los 1.000 €. Este es un campo abonado por contratos a tiempo parcial, discontinuos y hasta por «comisión» (según objetivos alcanzados previamente establecidos por las entidades privadas y sin tener en cuenta todas las horas

y el esfuerzo no computado para alcanzar dichos objetivos). Todo esto cuando el personal está contratado, pues como nos informa el INE, más del 50% del personal que se dedica a la atención y el acompañamiento a las personas sin hogar es un voluntariado sin ningún tipo de retribución monetaria y muchos de los cuales no cuentan con la mínima cualificación en intervención social. Hecho loable por parte esta ciudadanía, pero que también resulta algo inquietante.

Pero aparte de la tipología de las organizaciones, de estas circunstancias descritas y otras muchas que llevan a los profesionales a tener que realizar su labor en las más precarias condiciones en forma de sueldo y recursos de atención, centrémonos en lo fundamental, en la gente sin hogar y la intervención de la que son objeto. En Sevilla se estima que pueden vivir en la calle entre 800 y 2.000 personas. Mientras que tan solo existen unas 270 plazas de acogida que ofrezcan la posibilidad de pasar la noche, aunque el Ayuntamiento por obra y arte de birlibirloque las suba nada más y nada menos que hasta la astronómica cifra de unas 350. En el mejor de los casos ni siquiera se contaría con plazas para la mitad de las personas que viven en la calle. En el peor, no se daría cobertura al 85% de la población sin hogar de la ciudad.

Aunque no se ofrezcan datos oficiales y probablemente los responsables municipales y autonómicos los desconozcan —al no tomarse la molestia en averiguarlo—, en Sevilla se invierte en torno a los 6 millones de euros en la de atención específica a personas sin hogar. Cifra que podría multiplicarse exponencialmente, pues en ella no se contabiliza el gasto en atención sanitaria derivado de dolencias y enfermedades relacionadas directamente de

las duras e insalubres condiciones la vida en la calle, el de los servicios sociales comunitarios y especializados en otras situaciones que atienden a la gente de la calle o lo que cuesta a las arcas públicas las intervenciones que los cuerpos policiales y de los servicios de limpieza realizan puntual e inexorablemente sobre esta población desfavorecida. Para que nos hagamos una idea de cuál podría ser este incremento y aunque no conocemos o no se hayan publicado información y estudios fiables al respecto, pensemos que la cama ocupada en un hospital es de unos 955 € al día<sup>5</sup> (en uno privado es de 1.660 € al día, lo que supone un 74% más que en uno público), mientras que la cama en un centro de acogida para personas sin hogar está sobre unos 50 € al día<sup>6</sup>. Evidentemente no existe información de lo que cuesta la labor policial directamente relacionada con personas sin hogar, pues la mayoría se encuentra dispersa a lo largo del día y ni siquiera es registrada. No obstante, en Sevilla se realizan lo se denominan operativos de «asentamientos», en los que una o dos patrullas de la Policía Municipal<sup>7</sup>, una brigada de la Lipasam<sup>8</sup> y el servicio de emergencias sociales<sup>9</sup> recorren la ciudad dos veces por semana durante unas cinco horas expulsando a las personas sin hogar del lugar, tirando parte de sus pertenencias al camión-basura y limpiando la zona y las inmediaciones. ¿Cuánto cuestan este tipo de actuaciones al ayuntamiento, gran parte de las cuales se podrían evitar si dichas personas contaran con un alojamiento y una atención adecuada? ¿Cuánto cuesta una persona sin hogar a los servicios sociales comunitarios y a otros especializados? Las cifras totales podrían resultar mareantes. ¿Qué se podría hacer con ese dinero para realmente mejorar la atención a estas personas y prevenir que

se vieran en dicha situación? ¿Va a parar esta inversión a la mejora de vida de estas personas o se queda por el camino?

Quedémonos y tan solo tengamos en cuenta esos 6 milloncitos. Si como hemos expuesto, las plazas que ofrecen alojamiento no llegan a las 300, esto quiere decir que la inversión por persona sin hogar que tiene una atención relevante ascendería a unos 20.000 al año. Todo ello gastado por un sistema de intervención que muy rara vez y salvo muy contadas excepciones logra que alguna persona que vive en la calle supere dicha situación gracias a su labor. Lo habitual es que las actuaciones se queden en una atención meramente paliativa, discontinua, parcial y por un tiempo muy limitado. El sistema de intervención con personas sin hogar es conocido como el «túnel de lavado» o la «puerta giratoria» —claro está, una puerta giratoria muy diferente a la de las élites políticas y empresariales de este país tan solidario. Todo pese a que estos 20.000 € podrían considerarse a todas luces una inversión más que suficiente para que, al menos, esas cerca de 300 personas no solo pudieran mejorar sus condiciones de vida, sino incluso «salir» de la calle.

No consideramos que la solidaridad y la atención a las personas más desfavorecidas sea una cuestión simplemente de números y dividendos, pues el sinhogarismo es una realidad con unas características que tienen que ver más con lo cualitativo —su catadura—, que con cuantitativo —su extensión—, pero incluso matematizando esta realidad, las cifras cantan por sí mismas. ¿Realmente una ciudad con 800.000 habitantes y un presupuesto millonario no se podría hacer cargo con dignidad de estas 800 o 2.000 personas que viven en la calle o prevenir su caída en la misma? ¿Realmente la cuestión es inabordable? Incluso aceptando el juego de las estadísticas y la contabilidad,



tan del gusto de la empresa privada y las burocracias, el enfoque actual de la intervención en la ciudad sigue pareciendo totalmente inadecuado. Sigamos jugando a las matemáticas y veamos.

En el Centro de Acogida Municipal, de titularidad y financiación al 100% pública, pero de cuya gestión total —personal, servicios y atención— se encarga una empresa privada, una plaza cuesta unos 53 € por persona y día, lo que supondría unos 1.700 € al mes. Con lo que se invierte en 5 plazas al mes, se podrían alquilar cuatro pisos de dos habitaciones (a 500 € cada uno), que acogerían a un total de ocho personas (2 por vivienda). Quedarían disponibles hasta 575 € que se podrían utilizar como renta y ayuda para cada una de las personas (a sabiendas de que no tienen que pagar un alquiler). Esto supone tres plazas más que en el centro de acogida por el mismo precio y en mucho mejores condiciones. Además, se podría contratar a un profesional con un sueldo bruto de 1900 € al mes, quien se encargaría de llevar a cabo un acompañamiento y apoyo personalizado, si alguna de estas personas lo necesitara y que rara vez se realiza desde otro tipo de iniciativas más al uso y según el modelo —o más bien, falta del mismo— que actualmente impera en la ciudad. Todo ello en un ambiente y unos espacios mucho más propicios que los que son posibles en el Centro de Acogida Municipal, donde se produce una acumulación de unas 165 personas, cuando está ocupado al 100% —algo que no siempre sucede, pese a que todos los días en la puerta se queden personas que no han sido admitidas—. Con la fórmula que estamos esbozando y con el mismo presupuesto que actualmente el Ayuntamiento de Sevilla invierte en este centro, se podrían ofrecer

132 viviendas con dos plazas cada una, un alojamiento digno para 264 personas sin hogar, lo que supondría también una mejora cuantitativa de 99 plazas más de las 164 actualmente disponibles en dicho centro. En total, se podría contratar a 33 profesionales a jornada completa, que podrían apoyar a 8 personas cada una o 16 por pareja de técnicos —entre los que podría haber personas sin hogar que ha superado dicha situación y podrían orientar y acompañar desde la experiencia y tras un proceso de cualificación, a quienes se incorporaran a este tipo de iniciativas—. Si a tal efecto se movilizara y pusiera a disposición todo el parque de viviendas públicas o protegidas, además de implementar medidas realmente efectivas para la puesta en uso de viviendas vacías, la ecuación aún permitiría mayores y mejores posibilidades, pues se podría ahorrar parte o todo el dinero dedicado al alquiler. Todo ello sin tener que recurrir a la caridad de los bancos y las cajas —si aún se les puede llamar cajas de ahorro—, como está haciendo el controvertido y más que publicitado programa *Housing Firts*, a cambio —claro está— de un oportuno lavado de imagen por parte de algunas entidades privadas del Tercer Sector a los organismos financieros que más desahucios están practicando en nuestro país y que pueden ser tenidos como unos de los grandes protagonistas en la gestación de la crisis actual.

Según la mayoría de los estudios existentes sobre sinhogarismo en España, las personas sin hogar que presentan un deterioro agudo o grave, las que se considera que requerirían una atención permanente *sine die* o una intensiva a medio y largo plazo que les ayudara a recuperar sus propias capacidades y autonomía personal, pueden estar comprendidas entre un abanico del 20% y el 30%

del total (debido a un consumo abusivo del alcohol o de drogas, un trastorno mental grave no controlado, una patología dual, a que se encuentren en una situación de depresión o abandono profundo por una concatenación de situaciones estresantes drásticas, que padezcan una acumulación de diferentes factores, etc.). Esto quiere decir que, quizás, habría que reservar un porcentaje similar de plazas de alojamiento y atención en centros que posibilitaran unos cuidados y una atención intensiva, diferentes a la fórmula de vivienda para dos personas autónomas o semi-autónomas que hemos apuntado. Pero también que entre el 70% y el 80% de los sin hogar podría estar constituido por una población que en un corto o medio plazo, incluso en muchos casos desde el primer día, podría llevar una vida no dependiente si se les garantiza un alojamiento adecuado, unos ingresos dignos o el que puedan acceder y mantener un trabajo no precario y aceptable, lo que a su vez podría ofrecerles unas bases de mayor estabilidad y bienestar con los que reconstruir sus redes familiares y comunitarias o superar la soledad si ese sigue siendo su objetivo tras haber estabilizado su situación. Es decir, una población que a corto o medio plazo podría abandonar el sinhogarismo e incluso ya no depender de estos alojamientos y rentas públicas. Algo que resulta prácticamente inviable con el actual modelo de intervención y atención a las personas sin hogar vigente en la ciudad, que a lo máximo que llega es a un asistencialismo básico —salvo, como ya hemos apuntado, excepciones muy contadas— y que mantiene a personas institucionalizadas o desatendidas año tras año.

Podríamos ir desglosando más y más cifras, volvernos locos con los números, entrar en un análisis de una

intervención que hace depender el acceso y la permanencia en los dispositivos y los programas en requisitos impuestos a las personas, más que en criterios o en derechos, exponer alguna vías o perspectivas cualitativas y participativas de aproximarnos a esta gente de la calle y para que estas pudieran ser los protagonistas de sus propias vidas y procesos de cambio, exponer algunos de los pros y los contras de las nuevas modas de la intervención (como el mencionado *housing firsts*, que prácticamente se está adoptando como la verdadera panacea universal, tanto por conservadores, neoliberales y progresistas, sin tan siquiera conocerlo, analizarlo en profundidad y al margen de cualquier crítica), mostrar cómo el sistema de intervención es fundamentalmente un mecanismo de control y persecución de las personas sin hogar —pese a algunos logros puntuales y el esfuerzo sincero de muchos profesionales y voluntarios—, cómo el amiguismo y enchufismo impera en un sector privado, pese a que se encarga de un servicio público y es financiado por fondos públicos. Apuntar las formas que adopta la criminalización y estigmatización de la pobreza, mostrar la falta casi absoluta de iniciativas para la prevención y detección temprana, de enfoques y de actuaciones integrales y sostenidas, el relegamiento de los sujetos a objetos pasivos y números por parte de la intervención más en boga, las posibilidades y la conveniencia de que la inversión pública fuera a parar directamente o con las menos mediaciones posibles a las propias personas que viven en la calle o están en una situación de vulnerabilidad, describir cómo se ha desarrollado toda una retórica y solvencia discursiva en torno a la exclusión social que enmascara unas nuevas y las antiguas formas de asistencialismo, cómo se ha obstaculizado

la iniciativa local y ciudadana de la solidaridad en pos de los intereses de grandes corporaciones, la viabilidad y la conveniencia de impulsar iniciativas que superen la política de paños calientes, las potencialidades de la economía social y la ayuda mutua y un largo listado de cuestiones que podría contribuir a mejorar ostensiblemente la situación de la gente que se ve obligada a vivir y dormir en la calle o que ayudaran a evitar dicha situación. Pero con el juego de números tan solo pretendíamos mostrar cómo el aparato de intervención psicosocial con personas sin hogar no solo muestra evidentes fallos o resulta una inversión infructuosa y asistencialista, sino que parece obedecer a unas lógicas en las que priman intereses diferentes a los que se pregonan de una atención adecuada a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad o la búsqueda de formulas reales que pudieran al menos minimizar la posibilidad de que cada vez más y más gente se vea abocada a esta lamentable situación. ¿Es realmente imposible superar la política de paños calientes y control articulando una renta básica universal o una garantía de ingresos dignos? ¿Qué consecuencias tendría sobre el sinhogarismo el reconocimiento efectivo del derecho subjetivo de cualquier ciudadano a contar con una vivienda adecuada? ¿Estriba más la cuestión en que se creen más aparatos de intervención o de que la gente sin hogar deje de estar intervenida, pongamos por caso, por un mercado laboral precario, inseguro, indigno y excluyente? ¿Qué consecuencias tendría este tipo de «intervención para la desintervención» sobre las burocracias de intervención? ¿Se podría superar la dualidad de las soluciones estatistas-privadas mediante procesos de refuerzo de lo común, más que con el empoderamiento, con el desempoderamiento de las estructuras que se han

auto-otorgado el papel de gestión de los intereses de los demás? ¿Están las entidades del Tercer Sector propiciando la fortaleza de los tejidos informales y ciudadanos de solidaridad o más bien le están usurpando su papel y obstaculizando su desarrollo? Aunque el debate sería largo y complejo, al menos creemos que las dudas son más que pertinentes. Nos estamos refiriendo, no lo olvidemos, a una de las que pueden ser consideradas como graves situaciones por las que una persona puede quedar atrapada en nuestra sociedad.

## NOTAS

- 1 Antropólogo y miembro de la cooperativa La Entrepanta
- 2 Richard SENNETT (2012) Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación. Anagrama. Barcelona.
- 3 Edward Palmer THOMPSON (2012) La formación de la clase obrera en Inglaterra. Capitán Swing Libros. Madrid; Edward Palmer THOMPSON (2000) Costumbres en común. Crítica. Barcelona.
- 4 Centro de Orientación e Información Social del Ayuntamiento de Sevilla, que se encarga de coordinar la labor de algunos de los servicios de titularidad pública y gestión privada que atienden a las personas sin hogar.
- 5 En planta sería de unos 150 €, en urgencias de 430 € y en la UCI de unos 2.050 €. Esto sin contar el coste de las comidas, que puede rondar los 30 € (desayuno, almuerzo y cena), ni el coste de la atención médica y de enfermería.
- 6 Un centro de acogida de 24 horas, incluyendo comidas, higiene y aseo personal, atención psicosocial y demás servicios y otras prestaciones. (Fuente: elaboración propia en base a los gastos de diferentes centros de acogida en Sevilla y Andalucía)
- 7 Uno o dos coches patrulla, con todos sus equipamientos y dos o cuatro policías municipales
- 8 El servicio de limpieza municipal, con al menos tres operarios y un camión
- 9 Dos técnicos y una furgoneta. Nos informan de que en 2016 el servicio de emergencias sociales ya no participaba en dicho operativo. Lo que no deja de ser sintomático con respecto al giro exclusivamente policial e higiénico que han adoptado dichas actuaciones.